



Claves de la Semana

Riesgo País

15 diciembre-11 enero 2026



cesce

LATINOAMÉRICA



ESPECIAL VENEZUELA

| Operación Resolución Absoluta: Maduro, capturado

En la madrugada del 3 de enero, una incursión de fuerzas especiales estadounidenses culminó con la captura de Nicolás Maduro tras cinco meses de intenso despliegue aeronaval en el Caribe. Esta intervención, que puso fin a trece años de mandato, terminó con el traslado del dirigente venezolano y de su esposa, Cilia Flores, a Estados Unidos para enfrentar cargos federales por narcotráfico, narco-terrorismo y delitos relacionados con armas ante un tribunal federal de Manhattan. Allí ambos se declararon “no culpables” y Maduro afirmó ser un “prisionero de guerra”, poniendo en duda la legalidad de la operación. La escasa resistencia durante la detención ha suscitado especulaciones acerca de una posible colaboración desde dentro del chavismo que habría allanado el camino al operativo. Desde el punto de vista estratégico, la captura representa una demostración de poder comparable a la crisis de los misiles de 1962; Washington ha dejado clara su disposición a usar la fuerza para reordenar la región. Así, la operación funciona como una revitalización de la Doctrina Monroe frente a la creciente influencia de China, Rusia e Irán en América Latina.

| La ambigüedad estratégica de la Casa Blanca

La contundencia del golpe contrasta con una estrategia posterior ambigua, que refleja la contradicción interna del “trumpismo”: la búsqueda de resultados rápidos frente al rechazo a asumir compromisos prolongados de reconstrucción institucional en el extranjero. Por otra parte, a nivel interno, el operativo ha reavivado el debate sobre la legalidad del uso de la fuerza sin autorización del Congreso, cuestionando la vigencia de la *War Powers Resolution* de 1973. La justificación del operativo bajo la narrativa de la lucha contra el narcotráfico funciona como un recurso jurídico que permite ampliar el margen de acción de Washington, pero la eficacia y legalidad de este argumento siguen siendo objeto de debate entre los expertos en derecho internacional. Días después de la operación, el secretario de Estado, Marco Rubio, reveló que la intervención se organizará en tres fases —estabilización, recuperación y transición— mientras que el secretario de Energía, Chris Wright, confirmó que EE. UU. mantendrá el control del petróleo “indefinidamente” para condicionar la dirección política y económica del país. Washington parece confiar el desenlace venezolano al efecto de la presión política, económica y energética; sin embargo, la experiencia histórica advierte que la coerción, desprovista de una arquitectura política clara, suele derivar en procesos crónicos, costosos y difíciles de controlar.

El chavismo sin Maduro: un equilibrio precario

La caída de Maduro no ha provocado el colapso del entrampado de poder venezolano. Delcy Rodríguez ha asumido el control formal como presidenta interina, pero se mueve entre la presión directa de Washington y la vigilancia de los sectores duros del régimen, cuyos principales representantes serían Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López, quienes conservan el control de los aparatos coercitivos (como responsables de las carteras de Interior y Defensa, respectivamente). La cuestión, pues, no es si el chavismo puede sobrevivir sin Maduro, sino si puede hacerlo sin fracturarse ante una incertidumbre inédita. Como gesto hacia el exterior, el nuevo Gobierno ha ordenado la excarcelación de presos políticos —cerca de una treintena, según organizaciones locales—, como una señal de distanciamiento respecto al ciclo anterior, aunque sin alterar el control efectivo sobre los aparatos de seguridad. Finalmente, la oposición de María Corina Machado ha sido relegada por Donald Trump, quien descartó que pudiera tener un papel en la transición; al mismo tiempo lanzó una advertencia directa a Rodríguez: de no cumplir con sus exigencias, enfrentará consecuencias peores que las de su predecesor. Esto refuerza la percepción de que Washington apuesta por una reconfiguración controlada desde dentro del propio sistema.

La palanca de los recursos y la cautela del sector privado

El factor energético constituye el eje de la estrategia de Washington, motivado por la relevancia de unas reservas que representan el 17% del total mundial y cuya composición pesada es ideal para las refinerías del Golfo de México. Sin embargo, este interés se enfrenta a una industria devastada: tras décadas de falta de inversión y mala gestión, la producción venezolana es hoy apenas una cuarta parte del máximo registrado a finales de los noventa (unos 800.000 b/d en 2025, frente a 3,5 mill. b/d en 1998) y su infraestructura está gravemente deteriorada, lo que exige inversiones masivas solo para estabilizar la producción. Según algunas estimaciones, recuperar los niveles de hace quince años requeriría inversiones por valor de más de 100 000 millones de dólares. Por ponerlo en contexto, esta cifra equivale al doble del capital invertido por todas las empresas petroleras de EE. UU. en el mundo en 2024.

En ese contexto, Trump se ha reunido en la Casa Blanca con los principales ejecutivos de la industria petrolera —incluidas Chevron, ExxonMobil, ConocoPhillips, Shell, Repsol y Eni— para proponer que comprometan una inversión de 100 000 millones de dólares en la reconstrucción del sector venezolano. Presentó el proyecto como una oportunidad estratégica, pero bajo una advertencia: será Washington quien decida quién opera en Venezuela y sugirió que hay otras dispuestas a ocupar el lugar de quienes se muestren reacios a participar. La respuesta del sector fue dispar. Mientras Darren Woods, el CEO de ExxonMobil, describió a Venezuela como “ininvertible” bajo las actuales condiciones legales y comerciales y reclamó reformas profundas antes de comprometer capital, otras firmas como Chevron y Repsol mostraron una actitud más receptiva, aunque condicionada a la obtención de garantías políticas y jurídicas claras.

Más allá del crudo, Venezuela dispone de grandes depósitos de oro, carbón y níquel, aunque su explotación formal se ve comprometida por la presencia de grupos armados irregulares que controlan parte del territorio del llamado Arco Minero del Orinoco. Finalmente, la dimensión financiera introduce una presión crítica: la captura de Maduro ha reactivado las expectativas de fondos de inversión y acreedores internacionales, que ven en el cambio político la oportunidad definitiva para cobrar los miles de millones de dólares de deuda acumulada por el Estado y PDVSA..

Impacto regional y mensaje global

En América Latina, el episodio refuerza la percepción de un retorno del poder duro estadounidense. Países como México y Colombia observan con inquietud cómo la agenda de seguridad de Washington —narcotráfico, migración y ahora cambio de régimen— se amplía y se entrelaza, mientras que Cuba vuelve a situarse en el centro del radar estratégico estadounidense como aliado histórico del chavismo. Donald Trump ha reiterado que “no habrá más petróleo ni dinero” procedentes de Venezuela para Cuba, y urgió al gobierno de La Habana a “llegar a un acuerdo” con Estados Unidos “antes de que sea demasiado tarde” para evitar mayores consecuencias económicas, un mensaje que diversos medios interpretan como un ultimátum en un momento de profunda fragilidad energética y financiera para la isla.

Este episodio sienta un precedente delicado en el orden internacional. Diversos análisis interpretan que la ofensiva de Washington sobre Caracas constituye una señal para China y Rusia de que EE. UU. está dispuesto a expulsar a las potencias rivales de su zona de influencia, así como a reorientar el manejo del petróleo venezolano hacia sus propios intereses estratégicos y energéticos, pese a que este objetivo no se formule de manera explícita en el discurso oficial. La ONU ha apelado a la cautela, recordando que los recursos naturales de Venezuela, incluido su petróleo, pertenecen a su pueblo, y subrayando que las acciones de incautación en alta mar deben ajustarse al derecho internacional para evitar una escalada de inseguridad marítima. La intervención de EE. UU. no solo redefine el equilibrio en Venezuela, sino que erosiona las normas globales y envía un mensaje contundente sobre los límites de la influencia de potencias rivales en el entorno inmediato de Estados Unidos.

Reacción China e implicaciones para Taiwán

El Gobierno de China ha reaccionado con una "profunda conmoción" y una condena tajante, calificando la operación como una violación flagrante del derecho internacional y un acto de hegemonía que socava la soberanía de las naciones. A través de comunicados oficiales emitidos el 4 y 5 de enero, el Ministerio de Exteriores chino exigió la liberación inmediata de Maduro y su esposa, denunciando que el uso de la fuerza para un cambio de régimen sienta un "precedente peligroso" que sustituye el orden global por la "ley de la selva".

Esta postura oficial tiene un eco estratégico inmediato en el estrecho de Taiwán. Justo unos días antes de la captura de Maduro, Pekín llevaba a cabo una escalada de maniobras militares en el estrecho de Formosa ("Misión Justicia 2025"), con el argumento de que debe fortalecer su

capacidad de defensa ante posibles injerencias externas. Si bien la dinámica entre EE. UU. y China en torno a la isla sigue siendo la misma, los medios estatales chinos advierten de que la vulnerabilidad de aliados como Maduro evidencia la necesidad de disponer de una capacidad de disuasión inexpugnable, y se especula con que el ejército chino estudia ya la táctica de "descabezamiento" empleada por EE. UU. para integrarla en sus simulacros de bloqueo. Al mismo tiempo, Pekín está utilizando la crisis en Venezuela como una herramienta de propaganda, por una parte, para erosionar la legitimidad de EE. UU. en su acción internacional; y por otra, para alertar a Taiwán sobre los riesgos de confiar plenamente en la protección militar estadounidense frente a una potencia decidida a salvaguardar lo que considera su esfera de influencia bajo la doctrina Monroe.

| **La "Guerra de los Petroleros"**

Tras la captura de Maduro, la presión se ha trasladado a alta mar. Las fuerzas especiales de EE. UU. han comenzado a interceptar buques de la llamada "flota fantasma" (barcos con los que Venezuela eludía las sanciones estadounidenses contra su industria petrolera) en aguas internacionales, destacando la incautación del superpetrolero Marinera tras una persecución transatlántica. Esta ofensiva busca estrangular las rutas de exportación que el chavismo utilizaba para sortear sanciones, especialmente aquellas dirigidas a China, que en los últimos meses concentró el 84% de las compras de crudo venezolano. La consecuencia inmediata de este bloqueo es la creación de un "botín flotante" de 90 millones de barriles almacenados en buques que no pueden descargar. Este inventario errante, valorado en unos 5.400 millones de dólares, representa un gigantesco desafío logístico y económico. Mientras Washington intenta utilizar este recurso como palanca de negociación para controlar la transición, la saturación de los sistemas de almacenamiento amenaza con forzar un cierre técnico de la producción interna, agravando la fragilidad de un Estado que ya no puede dar salida a su principal recurso.

| **¿Groenlandia la siguiente?**

Apenas unos días después de la operación "Resolución Absoluta", Donald Trump fijó su objetivo en Groenlandia. El presidente insistió en que el control de la isla, un territorio autónomo perteneciente a Dinamarca, resulta vital para la seguridad nacional estadounidense. Aunque durante la campaña electoral ya había adelantado sus planes de anexión, nadie los consideró una amenaza real hasta la intervención militar en Venezuela, que ha cambiado por completo la percepción de sus palabras. En una declaración conjunta extraordinaria publicada el pasado 6 de enero, seis líderes europeos reafirmaron su apoyo a la soberanía de Groenlandia y Dinamarca y a los principios de la Carta de las Naciones Unidas. La Casa Blanca afirma que el presidente y sus asesores están considerando una "serie de opciones" para adquirir Groenlandia, negociadas o no, sin descartar el uso de la fuerza militar. Incluso se habla de la posibilidad de enviar pagos únicos a la población (unas 57.000 personas) para convencerlos de que se independicen de Dinamarca y se unan a EE. UU..

Los pretextos de Trump para justificar su interés en la isla han sido variados: su potencial riqueza minera (alberga tierras raras, grafito, cobalto y cobre, minerales esenciales para la fabricación

de material militar); contrarrestar la presencia china y rusa en el Ártico o cuestiones de seguridad nacional. A esto último, las autoridades danesas replican que Groenlandia ya alberga una base militar estadounidense, la base de Pituffik, y que no existen límites explícitos sobre el número de tropas que Estados Unidos puede desplegar allí (actualmente solo mantiene 200 soldados, mientras que, durante la Guerra Fría llegó a tener 10.000). También propugna que la OTAN refuerce su presencia en el Ártico.

| ¿Qué podemos esperar?

En el mercado petrolero, a pesar de la calma inicial en los mercados y de los anuncios de Washington, existe un profundo escepticismo acerca de la posibilidad real de aumentar la producción de crudo venezolano a corto plazo. Para finales de 2026, el consenso del sector sitúa el máximo realista en apenas 1,2 millones de barriles diarios, una cifra que queda muy lejos de los niveles históricos y que se topa con un "techo físico" inmediato debido al colapso de la infraestructura básica. Ante obstáculos estructurales como la crisis eléctrica, la escasez de diluyentes y la pérdida de personal calificado, cualquier reactivación productiva será necesariamente lenta y marginal, lo que convierte el retorno de Venezuela como actor relevante en el mercado global en un escenario improbable a medio plazo.

En cuanto a la estabilidad interna, el riesgo inminente para Venezuela no es un vacío de poder, sino la desarticulación gradual de los equilibrios que aún sostienen al Estado. Si bien la continuidad bajo Delcy Rodríguez y el control militar han evitado un colapso abrupto, no resuelven problemas como la economía devastada o el agotamiento social. Sin una hoja de ruta clara para la transición, el país corre el riesgo de quedar atrapado en un limbo prolongado, donde la expectativa de recuperación conviviría con una alta probabilidad de conflictividad y fragmentación interna.

Desde el punto de vista del equilibrio regional, la intervención en Venezuela consolida el retorno del protagonismo coercitivo de Estados Unidos, rompe el eje Cuba-Venezuela-Nicaragua y deja a La Habana en una situación de extrema vulnerabilidad energética. América Latina parece convertida en un tablero central de la competencia estratégica entre Washington, Pekín y Moscú, donde las tensiones geopolíticas globales condicionarán directamente los márgenes de maniobra política y económica de los gobiernos de la región.

Finalmente, para el sistema internacional en su conjunto, todo este episodio proyecta un mensaje de erosión del orden multilateral, priorizando la lógica de la fuerza sobre la soberanía estatal y la diplomacia tradicional. La disposición de Estados Unidos a utilizar el poder militar directo para alterar los equilibrios políticos en su esfera de influencia sienta un precedente que, a largo plazo, introduce un factor de inestabilidad adicional en un sistema internacional cada vez más fragmentado y competitivo por el control de los recursos estratégicos.

 **HONDURAS****| Nasry Asfura, presidente electo**

Tras semanas de recuento y disputas, el conservador Nasry Asfura (Partido Nacional) fue proclamado presidente electo por un margen muy ajustado frente a Salvador Nasralla el pasado 25 de diciembre. Su triunfo se entiende por el desgaste del oficialismo, el voto de castigo y el respaldo explícito de Donald Trump, que reforzó al electorado de derecha. Asfura llega con una agenda centrada en seguridad, inversión y empleo, pero sin mayorías en el Congreso: su partido será la primera fuerza, seguido de cerca por el Partido Liberal y con Libre en un tercer lugar debilitado. Con un Parlamento fragmentado y sin mayorías absolutas, necesitará pactar —especialmente con los liberales— para aprobar reformas y evitar que su programa quede bloqueado. Su victoria fue celebrada por EE. UU. y la UE como parte de un giro a la derecha en la región, mientras la oposición denuncia irregularidades y deja en cuestión la legitimidad institucional. Analistas anticipan un mandato condicionado por pactos legislativos y un clima social tenso en un país que sale más polarizado del proceso electoral.

**MERCOSUR / UE****| Acuerdo histórico tras 26 años**

La Unión Europea ha aprobado la firma del acuerdo comercial con Mercosur tras más de dos décadas de negociación, desbloqueando la creación de la mayor zona de libre comercio del mundo en pleno reordenamiento geopolítico. El pacto, respaldado por la mayoría de los Veintisiete pese a las negativas de Francia, Polonia, Austria, Irlanda y Hungría, elimina progresivamente aranceles y abre un mercado de más de 700 millones de consumidores, con grandes expectativas para la industria europea —especialmente automoción y maquinaria— y oportunidades para el agro sudamericano. Sin embargo, llega rodeado de tensión social y política: los agricultores europeos denuncian competencia desleal y han protagonizado protestas masivas, mientras gobiernos como el francés advierten de riesgos para el sector primario. Para el Mercosur, el sí europeo se celebra como un triunfo del multilateralismo y una señal de diversificación estratégica ante China y EE. UU., pero aún falta el voto del Parlamento Europeo y las ratificaciones internas, donde persisten dudas ambientales, agrícolas y de protección industrial que podrían condicionar su entrada en vigor.

ASIA



CHINA / TAIWÁN

Escalada militar: Mision Justicia 2025 en el estrecho de Formosa

El inicio de 2026 ha estado marcado por la "Misión Justicia 2025", la mayor operación militar de bloqueo simulado lanzada por el Ejército Popular de Liberación (EPL) de China alrededor de Taiwán, que alcanzó su punto álgido entre el 29 de diciembre y los primeros días de enero. Presentada por Pekín como una "severa advertencia" tras la aprobación de una venta de armas estadounidense a la isla por 11.000 mill.\$, la operación no solo incluyó un despliegue masivo de 210 aeronaves y 17 buques de guerra, sino que introdujo por primera vez el uso de fuego real a solo 24 millas náuticas de la costa taiwanesa. Durante estas jornadas, China simuló el bloqueo total de puertos estratégicos y rutas de suministro energético, enviando un mensaje directo de disuasión a Washington y Tokio. Según informes del Ministerio de Defensa de Taiwán publicados esta semana, la presión militar se combinó con una agresiva "guerra cognitiva" que incluyó más de 2,6 millones de intentos de intrusión cibernetica diarios contra infraestructuras críticas y la difusión masiva de contenido generado por IA para minar la confianza en la defensa de la isla. La operación se llevó a cabo tan solo unos días antes de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, que ha endurecido si cabe el discurso de integridad territorial por parte de las autoridades.



TAILANDIA / CAMBOYA

Nuevo acuerdo de paz

El pasado 10 de enero se produjo la firma de un nuevo acuerdo de alto el fuego, entre Tailandia y Camboya. El pacto, suscrito tras una semana de intensa negociación y bajo la mediación de EE.UU. y Malasia, busca poner fin a los ataques fronterizos que amenazaban con desestabilizar por completo la cohesión de la ASEAN. La noticia ha sido recibida con cautela debido al incumplimiento de la anterior tregua, pero con optimismo por la comunidad internacional, ya que el cese de los combates ha permitido el despliegue de observadores y la entrada de convoyes con ayuda humanitaria para las víctimas del conflicto. A pesar del éxito del acuerdo, la tensión persiste en la frontera. Apenas unos minutos después de la firma, un soldado tailandés perdió una pierna al pisar una mina en la provincia de Sisaket; simultáneamente, se reportaron bombardeos de aviones F-16 tailandeses en la provincia de Banteay Meanchey.

El conflicto, que se reanudó con fuerza el pasado 7 de diciembre, ha dejado al menos 31 civiles camboyanos muertos y cientos de miles de desplazados en ambos lados. Aunque el primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, afirmó que los objetivos militares en la frontera ya han sido alcanzados, la tregua sigue siendo frágil. El éxito del acuerdo dependerá de la capacidad

de ambos ejércitos para evitar nuevos incidentes con minas y de su compromiso para cooperar en la limpieza de explosivos y la lucha contra redes de estafas transfronterizas, tal como estipula el protocolo de paz.

MYANMAR

“Farsa” electoral

El régimen militar de Myanmar ha puesto en marcha un controvertido proceso electoral en tres etapas, iniciando su primera fase el pasado 28 de diciembre de 2025 y con una última prevista para el próximo 25 de enero, en un intento del general Min Aung Hlaing por proyectar una imagen de normalidad institucional ante la comunidad internacional. Sin embargo, estas votaciones se celebran en un escenario de colapso estatal donde la junta militar ha perdido el control de casi el 80% del territorio y donde más de 3,5 millones de desplazados internos huyen de una campaña sistemática de bombardeos aéreos contra objetivos civiles. Pese a que el gobierno de facto ha proclamado una participación del 52% en las áreas bajo su control, el proceso ha sido tachado de "farsa" por las Naciones Unidas y el Gobierno de Unidad Nacional (NUG), dado que la oposición democrática permanece ilegalizada y los combates se han intensificado incluso durante las jornadas electorales. En lugar de una transición hacia la paz, los analistas regionales advierten que este calendario electoral busca blindar jurídicamente a la cúpula militar frente a posibles cargos por crímenes de guerra, mientras el país se desangra en una parálisis económica absoluta y una crisis humanitaria que amenaza con desestabilizar permanentemente las fronteras del Sudeste Asiático.

JAPÓN

Possible adelanto electoral

En Japón, la primera ministra Sanae Takaichi baraja seriamente la disolución de la Cámara Baja el próximo 23 de enero de 2026, coincidiendo con el inicio del periodo ordinario de sesiones parlamentarias, para convocar elecciones generales anticipadas el 8 o 15 de febrero. Esta maniobra buscaría capitalizar sus inusuales índices de aprobación, que rondan el 70%, y consolidar una mayoría parlamentaria que actualmente es demasiado ajustada para impulsar su ambiciosa agenda política. En el plano económico, la noticia llega en un momento de gran volatilidad: el pasado 19 de diciembre de 2025, el Banco de Japón (BoJ) sorprendió al mercado con una subida de tipos de interés hasta el 0,75% —su nivel más alto en 30 años—, alejándose de su histórica política ultraexpansiva para combatir una inflación persistente del 2,9%. A pesar de este endurecimiento monetario, el yen ha continuado bajo presión, alcanzando mínimos de un año de 158,18 por dólar a principios de enero, lo que ha generado advertencias de intervención por parte del Gobierno. La próxima reunión del BoJ, prevista para el 23 de enero, será crucial para determinar si el gobernador Kazuo Ueda mantiene la pausa actual o si el

entorno de incertidumbre electoral y debilidad de la divisa forzará un nuevo ajuste antes de lo previsto por el mercado.

EUROPA DEL ESTE - CEI



ESPECIAL CONFLICTO UCRANIA

| [El proceso de paz atraviesa un momento crítico](#)

A finales de 2025, el gobierno ucraniano impulsó un nuevo proceso de paz ante el ultimátum dado por Donald Trump antes del período navideño. De esta forma, Volodimir Zelenski, publicó su plan de 20 puntos que, según afirmó, estaba consensuado en un 90% con los mediadores internacionales. Entre los principales puntos de la propuesta se incluyen el reconocimiento de Ucrania como estado soberano, el acuerdo entre Rusia y Ucrania a no atacarse mutuamente, garantías de seguridad vinculantes o el estatus neutral de Ucrania (no se adhiere a la OTAN, pero sí a la UE). Poco después de la presentación del plan, Ucrania y Estados Unidos mantuvieron reuniones de alto nivel lo que acercaba la posibilidad de resolución del conflicto. En paralelo, la “Coalición de Voluntarios” acordaron la creación de una fuerza multinacional de paz que se desplegaría sobre el terreno una vez se alcanzase el alto el fuego. Sin embargo, los avances diplomáticos contrastan con la situación sobre el terreno donde Rusia continúa llevando a cabo ataques masivos contra infraestructura crítica. El más reciente ha sido el lanzamiento de un misil balístico Oreshnik contra la ciudad de Leópolis, la más próxima a la frontera con Polonia, en respuesta al ataque de Kiev contra la residencia presidencial que Ucrania rechaza haber perpetrado.

| [Reorganización del gobierno ucraniano](#)

El gobierno de Volodimir Zelenski ha experimentado su reajuste más profundo y significativo desde el inicio de la invasión en 2022. Se trata de un “reinicio” gubernamental, en palabras del propio presidente, que busca preparar al país ante dos posibles escenarios: el fin diplomático del conflicto o un mayor refuerzo defensivo en caso de que fracasen las negociaciones. El cambio más significativo ha sido la sustitución de Andrey Yermak, quien dimitió como jefe del gabinete del presidente tras un escándalo de corrupción, por Kirilo Budanov, jefe de la inteligencia militar, de quien se especula que incluso podría optar a suceder al presidente Zelenski en un futuro. Además, el hasta ahora ministro de Transformación Digital, Mijailo Fedorov, ha pasado a ocupar la cartera de Defensa, lo que da una idea de la importancia del ámbito tecnológico en el conflicto. Zelenski también ha sumado figuras externas como la exministra de finanzas de Canadá como asesora de desarrollo económico y ha recuperado antiguos perfiles como el conocido Dimitro Kuleba, antiguo ministro de exteriores. A pesar de

la magnitud de los cambios, algunos miembros de la oposición critican que el sistema sigue siendo el mismo, calificando el reajuste como un simple intercambio de posiciones entre el círculo íntimo de Zelensky.

NORTE DE ÁFRICA ORIENTE MEDIO

IRÁN

Manifestaciones multitudinarias

El 28 de diciembre numerosos comerciantes del Gran Bazar de Teherán iniciaron una protesta por el severo deterioro de la economía, marcado por el desplome de la moneda, el rial iraní. La divisa persa ha perdido en el último año más de un 80% de su valor, al situarse actualmente el tipo de cambio por encima de los 1.400.000 riales por dólar. Como resultado, la inflación se ha disparado en los últimos meses por encima del 40%. A esto se suma la escasez de bienes básicos, como alimentos, electricidad y agua. Con el paso de los días, las protestas se han extendido a lo largo del país, adoptando un matiz cada vez más político, en contra del régimen teocrático dirigido por el ayatolá Jamenei. Inicialmente el Gobierno mostró una postura conciliadora, anunciando algunas medidas sociales para atenuar las difíciles condiciones económicas; sin embargo, poco después adoptó, al igual que en anteriores episodios de contestación social, medidas represivas para neutralizar las movilizaciones. El 8 de enero las autoridades bloquearon por completo las comunicaciones telefónicas y el acceso a internet para impedir la coordinación de los manifestantes. El apagón ha estado acompañado de una mayor brutalidad por parte de las fuerzas de seguridad. Algunas ONG, como la organización Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, afirman haber verificado el asesinato de cerca de medio millar de manifestantes, en su mayoría por impactos de munición real. Además, las fuerzas de seguridad han arrestado a más de 10.000 personas. El apagón de las telecomunicaciones imposibilita analizar la evolución y la magnitud de las protestas. Algunas fuentes sugieren que el régimen se enfrenta al mayor desafío social desde el derrocamiento del sha, en 1979. Los disturbios han provocado incendios en numerosos edificios públicos, como mezquitas, sedes gubernamentales y bancos. Por ello, ha cobrado fuerza la posibilidad de que las movilizaciones acaben fracturando al régimen. Tampoco se descarta el escenario opuesto: que la represión sea tan feroz que termine por fortalecer el control que ejercen las autoridades sobre la sociedad civil.

¿Intervención de Estados Unidos?

En el ámbito internacional, las movilizaciones han tensionado más si cabe las relaciones entre Estados Unidos e Irán. En los primeros días de las protestas, el presidente Donald Trump sugirió, a través de las redes sociales, la posibilidad de una intervención militar. En concreto, el 2 de enero afirmó que "Si Irán dispara y mata violentamente a manifestantes pacíficos, Estados Unidos acudirá a su rescate". En respuesta, las autoridades iraníes han señalado que cualquier ataque provocaría una respuesta contra Israel y contra las bases e instalaciones de Estados Unidos en Oriente Medio. Algunos medios de comunicación aseguran que el 13 de enero el presidente norteamericano analizará junto con sus asesores las medidas que se adoptarán en respuesta a la violencia ejercida por Teherán contra los manifestantes. El abanico de opciones que se baraja es amplio; entre otros, acciones ciberneticas, imposición de nuevas sanciones económicas o actuaciones más contundentes, como ataques contra instalaciones militares. Tampoco se descarta la posibilidad de que el debilitamiento del régimen propicie un acercamiento con Estados Unidos. El propio Trump señaló el 11 de enero que, tras sus amenazas, funcionarios iraníes le habían llamado para negociar. "Se está organizando una reunión", aseguró el presidente.

SIRIA

Enfrentamientos entre el ejército y las fuerzas kurdas

Nuevo episodio de lucha armada en Siria. El fracaso de la reunión entre representantes de la comunidad kurda y el gobierno interino del país, celebrada el pasado 6 de enero, desembocó en duros enfrentamientos entre el ejército oficial y el brazo armado de los kurdos, las denominadas Fuerzas Democráticas de Siria (FDS), en Alepo, la segunda ciudad más grande de Siria. Los choques alcanzaron un grado de violencia inédito desde la caída de Bashar al Asad en diciembre de 2024, con el empleo, por parte de Damasco, de artillería pesada y carros de combate. Al verse arrinconadas, las FDS aceptaron el 11 de enero abandonar los barrios bajo su control (Ashrafieh y Sheikh Maqsoud), y replegarse hacia las regiones del noreste del país. De acuerdo a los medios oficiales, los enfrentamientos han provocado la muerte de una veintena de civiles y han forzado el desplazamiento de más de 150.000 personas. Estos acontecimientos suponen un nuevo revés en el proceso de pacificación. El pasado mes de marzo ambas partes alcanzaron un acuerdo que invitaba al optimismo. Sin embargo, en este tiempo los dos bandos se han acusado mutuamente de obstaculizar la hoja de ruta. Uno de los principales puntos de tensión es la integración de los combatientes de las FDS en las fuerzas armadas. Por otra parte, las hostilidades contradicen las promesas del gobierno interino liderado por el presidente Ahmed al-Sharaa de proteger a las minorías del país. Además de los combates de esta semana en Alepo, en marzo se registraron enfrentamientos contra la comunidad alauita en la costa oriental y, posteriormente, en julio se produjeron violentos choques contra la minoría drusa, en el sur del país.

ÁFRICA SUBSAHARIANA



SOMALIA / ISRAEL / UNIÓN AFRICANA

Israel se convierte en el primer país en reconocer formalmente a Somalilandia

El pasado 26 de diciembre, por sorpresa y de forma pionera, Israel anunció su reconocimiento a la autodeclarada República de Somalilandia como un Estado soberano e independiente. Esta decisión rompe con décadas de ostracismo internacional hacia la región del noroeste de Somalia, la cual declaró su independencia de forma unilateral en 1991. Desde entonces, ha operado *de facto* como un Estado, logrando consolidar su propia constitución y divisa. Además, destaca por presentar índices de desarrollo económico superiores y una estabilidad política notablemente mayor que la propia Somalia. El reconocimiento ha generado un rechazo inmediato por parte de las autoridades de Somalia en Mogadiscio, que defienden la unidad territorial del país y consideran que cualquier trato directo con Somalilandia es una injerencia externa.

Para el gobierno israelí, este movimiento permite establecer una relación diplomática con un territorio que ocupa una posición estratégica frente al Mar Rojo, un punto de paso esencial para el comercio marítimo hacia el canal de Suez. Contrarrestar la amenaza que supone la intensificación de los ataques de la milicia hutí de Yemen en esa ruta formaría parte de los motivos tras la decisión de Israel. Además, Somalilandia es, precisamente, uno de los territorios donde los gobiernos de Benjamin Netanyahu y Donald Trump sondearon hace meses la posibilidad de reasentar a ciudadanos palestinos provenientes de la Franja de Gaza, una propuesta que ya circulaba en medios internacionales y círculos diplomáticos en marzo de 2025. Sin embargo, Somalilandia ha negado que el reconocimiento permita a Israel establecer bases militares allí o el reasentamiento de gazatíes.

La decisión de Israel supone un cambio importante en la geopolítica del Cuerno de África, ya que podría forzar a los países vecinos a tomar una postura definitiva sobre un conflicto de soberanía que ha permanecido congelado durante más de treinta años, pero que ha ganado creciente importancia en el último lustro. La Unión Africana, China y Reino Unido han condenado públicamente la decisión israelí, en defensa de la soberanía somalí, también respaldada por Turquía y Egipto: Ankara protege sus grandes inversiones en defensa y energía en la zona, mientras que El Cairo se suma a este bloque para evitar que su rival, Etiopía, gane influencia marítima y económica. Adis Abeba es la gran beneficiada: el respaldo de Israel facilita su propio plan de obtener una salida al mar a través de Somalilandia. Del mismo modo, Emiratos Árabes Unidos, aunque mantienen un perfil bajo son el músculo financiero detrás del puerto somalilandés de Berbera, por lo que encuentran en este reconocimiento una forma de

asegurar sus intereses comerciales bajo un marco de mayor estabilidad diplomática. A ello se suma que Estados Unidos parece validar la postura israelí como parte de una estrategia más amplia para contener la influencia de Irán en el estrecho de Bab el-Mandeb, e incluso se baraja la posibilidad de que Washington pueda dar el paso de sumarse al reconocimiento a lo largo de 2026.



NIGERIA / ESTADOS UNIDOS

Washington bombardea al Estado Islámico en el norte de Nigeria

El 25 de diciembre, Estados Unidos llevó a cabo ataques contra militantes asociados al Estado Islámico en el norte de Nigeria en coordinación con el gobierno nacional. Los ataques aéreos de diciembre tenían como objetivo los campamentos de Lakurawa, una filial del ISSP (Estado Islámico de la Provincia del Sahel) en el estado de Sokoto, cerca de la porosa frontera con Níger. Pese a la escasa información confirmada sobre la ofensiva, en la que drones MQ-9 Reaper dispararon 16 misiles guiados por GPS, tanto Washington como Abuja han proclamado el éxito estratégico de la misión. Más allá de lo militar, la operación cumple una función política clave para los presidentes de ambos países: Trump utiliza estos ataques para reafirmar su retórica contra lo que él denomina, muy polémicamente, un "genocidio de cristianos" en Nigeria, mientras que Tinubu busca proyectar una imagen de autoridad y control territorial ante una ciudadanía nigeriana agotada por una crisis de inseguridad descontrolada y la percepción de un Estado ausente. Nigeria enfrenta una compleja crisis de seguridad que combina el bandido, el extremismo islamista y conflictos rurales, sumando casi 20.000 muertes en el último lustro, según datos de ACLED. Aunque figuras como Trump han centrado su discurso en la persecución religiosa, tanto cristianos como musulmanes han sido víctimas de una violencia estructural que el gobierno de Tinubu aún no logra contener. No obstante, y dada la justificación utilizada por Washington, fuentes locales cuestionan la elección de Sokoto como objetivo, una zona mayoritariamente musulmana, cuando provincias como Níger, Kebbi o Borno han sufrido históricamente niveles de violencia y actividad yihadista mucho más altos.



GUINEA

El General Dombouya legitima su liderazgo con una victoria aplastante en las presidenciales

Los resultados definitivos de las elecciones en Guinea han confirmado el triunfo rotundo de Mamady Doumbouya con un 87% de las papeletas, lo que hace innecesaria una segunda vuelta. El actual mandatario, que llegó al poder mediante un golpe de Estado en 2021, legitima así su liderazgo tras los comicios del 28 de diciembre. La Corte Suprema de Guinea ha confirmado la posesión del cargo y, con ello, la vuelta del país al régimen civil. Este resultado, que le otorga un mandato de siete años, era ampliamente esperado, ya que el gobierno había limitado

profundamente la actividad opositora: con las principales amenazas a su victoria en el exilio, Doumbouya se enfrentaba a una oposición muy fragmentada y débil.

OCDE



ESTADOS UNIDOS

| Washington abandona decenas de organizaciones internacionales

El presidente Trump ordenó la retirada de Estados Unidos de 66 organizaciones internacionales que, de acuerdo con su administración, ya no sirven a los intereses estadounidenses. Casi la mitad son entidades de las Naciones Unidas de las que Estados Unidos es miembro o parte. Su salida pondrá fin tanto a la participación como a la financiación estadounidense con el objetivo de asignar el dinero de los contribuyentes a otras prioridades relacionadas con la agenda "America First". Además, el próximo 27 de enero de 2026 se hará efectiva la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París, una de las primeras medidas anunciadas por el presidente Trump tras volver al cargo en enero de 2025. A partir de ese momento, Estados Unidos ya no estará legalmente obligado a cumplir los compromisos de reducción de emisiones de carbono contemplados en el acuerdo. Ahora, el Ejecutivo ha ordenado la salida de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), un tratado ratificado por el Senado, por lo que se espera que enfrente obstáculos legales en los tribunales estadounidenses.

| Aumento del presupuesto militar

Donald Trump ha anunciado que pedirá al Congreso aumentar el presupuesto de defensa de 1 billón de dólares al año a 1,5 billones para 2027. La propuesta de aumentar en un 50 % el gasto militar se produce en un contexto en el que Estados Unidos registra un déficit presupuestario del 6 % del PIB, unos 2 billones de dólares. El presidente proporcionó pocos detalles de sus planes, pero sugirió que los ingresos por aranceles podrían cubrir este incremento del gasto. No obstante, y a la espera de la decisión del Tribunal Supremo sobre la legalidad de los aranceles recíprocos, los gravámenes de 2025 supusieron un ingreso de apenas 195.000 millones \$, de acuerdo con la estimación de la Oficina de Aduanas de EE.UU., muy lejos de la cifra de gasto militar que pretende aumentar el presidente.

| Escala el enfrentamiento entre Powell y Trump

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha confirmado que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos le ha enviado una citación amenazándolo con abrir una causa penal. La fiscalía sospecha que el máximo responsable de la política monetaria habría mentido en su testimonio el pasado mes de junio ante el Congreso para explicar los sobrecostes en unos

trabajos de renovación de la sede de la Fed. Powell, por su parte, afirma que la amenaza responde a la negativa del banco central estadounidense de bajar los tipos de interés tal y como insiste el presidente Trump. La medida marca una escalada en la larga disputa que ambos mantienen desde que Trump comenzase su segundo mandato. El presidente ha amenazado en repetidas ocasiones con despedirlo y ha puesto en tela de juicio la independencia de la institución con el despido de la gobernadora Lisa Cook, un caso aún pendiente de revisión por parte del Tribunal Supremo, así como con el nombramiento de Stephen Miran en septiembre de 2025, partidario de rebajar los tipos. Recordemos que el mandato de Powell concluye el próximo mes de mayo, pero se espera que el presidente Trump desvele el nombre de su sucesor a finales del mes de enero.



© CESCE, S.A. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial, la distribución o comunicación pública de este documento, así como la edición de todo o parte de su contenido a través de cualquier proceso reprográfico, electrónico u otros sin autorización previa y expresa de su titular. La información contenida en este documento refleja exclusivamente comentarios y apreciaciones propias de esta Compañía, por lo que Cesce declina cualquier tipo y grado de responsabilidad por el uso incorrecto o indebido de dicha información.